

Rearme e hipótesis de conflictos en la región Andina

Pável Alemán Benítez
Investigador del CEA

La historia de las relaciones entre los estados sudamericanos, desde su nacimiento en el siglo XIX, y pese a la aplicación del principio *uti possidetis*, para establecer sus límites internacionales de manera pacífica, ha estado atravesada de manera frecuente por conflictos armados interestatales vinculados a reivindicaciones territoriales y el acceso a recursos naturales renovables y no renovables.

Dos de los conflictos nacidos en aquel siglo, adquieren hoy notoriedad al amparo de coyunturas políticas (exógenas y endógenas) diferentes y vinculados al acceso a recursos como los energéticos fósiles o el agua, cuya escasez previsible en un futuro cercano parece estar tocando nuestras puertas. Concretamente me refiero a la cada vez más explosiva situación en torno a la frontera colombo-venezolana y al no menos preocupante reavivamiento de las tensiones entre Chile y Bolivia en conexión con la justa demanda de La Paz de una salida soberana al Océano Pacífico. En ambas situaciones, el rearme de algunas de las partes expresa el agravamiento de estas tensiones, aunque mi análisis se va a concentrar por la inmediatez de los acontecimientos en el primero de los casos mencionados.

Causas históricas y actuales del conflicto colombo-venezolano. Una hipótesis al respecto

El litigio fronterizo entre Colombia y Venezuela tiene su origen en la aspiración colombiana de tener acceso al Golfo de Venezuela para beneficiarse de los recursos energéticos que existen en su plataforma marina. Sin embargo, hay otra causa de conflictividad de más larga data, relacionada con la conformación de los territorios de ambos países y su posterior delimitación.

Desde el siglo XVII ha existido una interconexión física y comercial entre los territorios de los actuales estados venezolanos de Zulia, Táchira, Trujillo y Mérida con los Departamentos colombianos de La Guajira, César y Norte de Santander, zona binacional que de conjunto es conocida como la ‘región histórica marabina’. Las regiones de Mérida y Zulia pasaron de la Nueva Granada a la Capitanía General de Venezuela en 1777. No obstante, hay hitos que demuestran una tendencia de estas regiones del occidente venezolano a intentar conformar parte de una misma unidad geoeconómica junto al nororiente colombiano. Quizás esto explique cómo en medio del movimiento separatista venezolano conocido como “La Cusiata”, iniciado en abril de 1826, los “departamentos venezolanos como el Orinoco y el Zulia (...) permanecieron fieles al Libertador”¹(léase a la Gran Colombia). En 1830, Venezuela se convirtió en territorio independiente de la Gran

¹ Cenía Salazar de Moreno, Grazzina Morela Jiménez y Mariana Miliani de Mazzei, *Historia de Venezuela*, t. I, FEDUPEL, Caracas, 2000, p.403.

Colombia, lo que conllevó al trazado de un límite internacional entre ambos estados, dejando abiertas las aspiraciones colombianas de anexarse aquella parte del territorio venezolano. En 1858 en el Congreso de Nueva Granada se valoró la propuesta de anexión del Zulia, Táchira y Mérida. Durante el siglo XX, ese pretendido secesionismo se vio alimentado con el auge de la exploración petrolera. Ya en 1922, el diplomático norteamericano P.L. Bell sugirió al Departamento de Comercio de su país, la necesidad de considerar al occidente venezolano “como una unidad separada, dividida del resto de Venezuela”,² para constituir junto al nororiente colombiano un estado petrolero: la República del Zulia. Es decir, otro Panamá.

En la actualidad, esa identidad diferente ha sido utilizada por la oposición al gobierno del presidente Chávez para presentar al Zulia como un territorio al que Caracas ha dejado desguarnecido frente a las incursiones armadas realizadas por las diferentes fuerzas contendientes en el conflicto colombiano. De hecho, los ganaderos venezolanos han recurrido a la contratación de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para crear sus propios ejércitos privados, los que han estado prestando sus servicios en la represión del movimiento campesino vinculado con la reforma agraria, algo que ha sido denunciado por el vicepresidente ejecutivo de la República, José Vicente Rangel: “La acción de los paramilitares en Venezuela no es la primera, es la continuación de una serie de hechos muy graves, aquí han asesinado en la frontera a más de 60 activistas, campesinos del Gobierno, impunemente, por sectores paramilitares, particularmente en la frontera del Táchira con Colombia.”³

Retomando el diferendo por la salida al Golfo de Venezuela, hay que recordar que en 1952 Colombia desconoció un tratado de límites que había firmado en 1941 con Venezuela y puso en duda la soberanía de Caracas sobre el archipiélago de Los Monjes. Más de treinta años después este tema reflató con el incidente de la corbeta colombiana Caldas en 1987 y que estuvo a punto de desembocar en un conflicto armado entre ambas naciones.⁴ Al

² Citado por el Dr. Germán Cardozo Galué, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Zulia, en “Venezuela: regiones fronterizas y globalización”, *Revista de Ciencias Sociales*, vol. VIII, no. 3, septiembre-diciembre de 2002, p. 460.

³ José Vicente Rangel, “Un tema de Estado. Declaraciones a la prensa nacional”, *Revista Koeyu Latinoamericano*, Caracas, 10 de mayo de 2004, en <http://www.koeyu.com/>

⁴ Hay una interesante construcción de un grupo de hipótesis en torno a un conflicto armado entre ambos estados, que fue realizada por el Mayor (r) de las fuerzas armadas colombianas Gonzalo Bermúdez Rossi, en su libro *El poder militar en Colombia, de la colonia a la contemporaneidad*, Santa Fe de Bogotá, 1992, pp. 70 a 72. En mi opinión algunas de estas hipótesis mantienen una excepcional validez para el análisis que realizo en el presente artículo, a saber:

Externas (territoriales): la iniciativa militar estará en manos de quien posea mayor poderío aeronaval, siendo las fuerzas terrestres venezolanas potencialmente inferiores a las de Colombia. En tal caso, el país cuya condición sea de inferioridad militar podría retornar la iniciativa si combina elementos de guerra regular con la irregular, siendo su misión principal la neutralización de objetivos estratégicos y económicos considerados vulnerables y de “interés vital” para el adversario (Entiéndase especialmente infraestructura petrolera). Una rápida intervención de los organismos internacionales evitaría la escalada bélica. Véase papel de la OEA y fundamentalmente de los Estados Unidos en dicha intervención.

Internas (sociales): Si Colombia acrecienta su poderío bélico, en ausencia de conflicto externo, se rompería decisivamente el equilibrio militar con la insurgencia. Un conflicto externo podría obligar a una colaboración conjunta de las fuerzas armadas y la insurgencia colombiana.

Internacionales (geopolíticas): Un conflicto bélico entre ambos países se desplegaría en un “teatro de guerra petrolero”, escapando al control binacional, siendo probable su internacionalización por las principales

respecto creo importante subrayar que la usual desconfianza mutua entre los ejércitos de ambos estados, que siempre se han visto recíprocamente como el posible adversario externo a derrotar, fue sustituida desde esa época y especialmente durante el mandato de Caldera, por una estrecha colaboración en los campos de inteligencia y lucha antsubversiva contra los movimientos insurgentes colombianos. Esta postura alcanzó su mayor alcance durante la administración de Rafael Caldera, con la autorización a las fuerzas armadas colombianas para que “persiguieran en caliente” a los insurgentes de dicho país si estos se adentraban en sus acciones en el territorio venezolano. Este procedimiento, lesivo de la soberanía venezolana fue derogado por el mandatario Hugo Chávez al tomar posesión de su cargo.

Luego de hacer una síntesis de cómo se han conducido las relaciones entre ambos estados, voy a presentarles las actuales causales que a mi juicio potencian la posibilidad de un conflicto armado colombo-venezolano, y que luego de enumerarlas pasaré a comentar.

1. La tendencia decreciente de la exploración, producción y reservas petroleras colombianas.
2. La relativa posibilidad de que Venezuela reoriente la exportación de los derivados del petróleo hacia mercados extrahemisféricos, concretamente hacia la República Popular China, afectando el suministro de hidrocarburos al mercado norteamericano.
3. Las discrepancias entre Caracas y Bogotá por la decisión de la primera de no involucrarse en el conflicto colombiano y en consecuencia, no estigmatizar políticamente a los movimientos insurgentes colombianos.
4. La colaboración entre la derecha colombiana en el gobierno y la derecha golpista venezolana.
5. La ruptura del tradicional balance estratégico entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela, a favor de Bogotá.

Sobre el primer punto creo necesario recordar que desde el año 2000, se ha venido produciendo un descenso en la producción petrolera colombiana de un 15 % anual. Esta tendencia, según los especialistas de ECOPETROL afectaría la autosuficiencia de Colombia en hidrocarburos, entre el 2004 y el 2007. Esto contrasta con el hecho de que “desde 1998 el gobierno de Bogotá ha ido aumentando su gasto en defensa (...) [y] destina el 5 % de su PIB (...) [sin contar la ayuda norteamericana], que podría subir en el futuro próximo al 7 %.”⁵

fuerzas geopolíticas. Estando ambos países en el área de influencia y de seguridad de los Estados Unidos, quien capte la mayor asistencia bélica de dicho país será su más seguro gendarme. Por lo tanto, su función de gendarme sería coherente con su rearme y el aumento del desequilibrio bélico regional, convirtiéndose dicho país (para el Mayor (r) Bermúdez ese país era Venezuela en 1992, en mi artículo y de acuerdo con el contexto actual planteo que es Colombia), sería la fuerza represiva para disuadir a estados contestatarios de Washington y a los movimientos de liberación de América Latina y el Caribe. Dichas adquisiciones de material bélico en los Estados Unidos, implican un aumento del grado de dependencia militar de Colombia a dicho país.

⁵ Carlos Malamud, *El largo camino para la paz en Colombia (2ª parte): Las difíciles relaciones de Colombia con sus vecinos: Venezuela -DT N° 5/2004*, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2004, p.3.

Contrariamente a lo esperado de un país que hace descansar su política económica sobre la venta de hidrocarburos, y que posee una asfixiante política tributaria para financiar los gastos de la guerra que libran las fuerzas armadas contra la insurgencia, Colombia tiene un índice muy bajo de exploración para hallar nuevos yacimientos de hidrocarburos. Si la media mundial es de 105 pozos por cada 10 000 km² de zonas sedimentarias, en Colombia el índice es de 23 pozos en similar área. O se están protegiendo las potenciales reservas de la extracción, “calculadas en 2,6 mil millones de barriles, y cerca de 26 mil millones más en sus reservas potenciales”,⁶ creando un depósito a largo plazo para las empresas transnacionales y multinacionales, en espera de que el conflicto civil termine y no amenace la más barata transportación terrestre a través del istmo centroamericano;⁷ o en realidad se están agotando los yacimientos colombianos y eran falsas las expectativas generadas por las empresas encargadas de hacer prospección. De hecho, el “proyecto Guandó, en el bloque Samoré, ha recibido fuertes críticas por parte de expertos y congresistas colombianos quienes señalan allí no hay las reservas anunciadas (200 Millones de barriles)”.⁸

De otra parte, los yacimientos petroleros de Caño Limón, Cusiana y Cupiagua, así como los gasíferos de La Guajira y Cusiana, están mayoritariamente bajo el control de los socios multinacionales de ECOPETROL, con un 75 % de participación en los contratos de asociación para la extracción de petróleo y de un 97 % para el caso del gas. Estos yacimientos, que son los que están produciendo la mayoría de los ingresos petroleros de Colombia, están siendo explotados intensivamente. El presidente Uribe ha anunciado que la compañía Texas explotará hasta su extinción el yacimiento gasífero de La Guajira. De igual el presidente Uribe: “anuncia que el yacimiento de Caño Limón, será explotado hasta su agotamiento por la Occidental Petroleum, que significará la pérdida de los colombianos del 30 % último del yacimiento, lo cual ocurrirá también con todas las empresas que tengan ‘contratos de Asociación’ con Colombia...”⁹

Si el gobierno colombiano busca reducir su déficit en la balanza de pagos y se encuentra ante el agotamiento de sus reservas conocidas de hidrocarburos, entonces “la única

⁶ Fernando Garavito, *Tres horas al sur de la Florida*, Argenpress, 6 de mayo de 2004, en <http://www.argenpress.info/nota.asp?num=010933>.

⁷ Además del financiamiento otorgado a través del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, Colombia recibió partidas complementarias para la protección de sus oleoductos de los ataques de las guerrillas, especialmente el de Caño Limón-Coveñas. Esto pudiera ser un indicador de que aún hay reservas de hidrocarburos sin explotar. Sin embargo, mi percepción es que se trata de proteger una infraestructura muy valiosa para realizar la interconexión energética hemisférica, lo que eliminaría o reduciría las importaciones de crudos venezolanos por vía marítima. A la vez, sería una alternativa mucho más barata para exportar gas y petróleo venezolanos hacia territorio norteamericano a través de ductos, en relación con el costoso proyecto que pretende crear una red de ductos a través del arco insular caribeño con destino a la Península de la Florida, calculado entre \$6 800 y \$10 000 millones de dólares estadounidenses, y de muy difícil ejecución en aguas profundas. Sobre este último aspecto, sugiero consultar mi ensayo “*Los intereses de Estados Unidos y sus empresas transnacionales petroleras en el área de los países pertenecientes al Grupo de los Tres*”, en http://www.cubaliteraria.com/ciencias_sociales/ciencias_sociales_20.htm.

⁸ Silva González y Luis Milko, “Colombia y Venezuela: ¿socios petroleros?” (I), en <http://colombia.analitica.com/economia/7013333.asp>. En la cita mencionada se utiliza la unidad de medida Mm/b como sinónimo de Millones de barriles de petróleo.

⁹ Allende De la Paz, “Plan Colombia. Papel de las petroleras”, *Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNOL)*, 8 de mayo de 2004, en <http://www.argenpress.info/nota.asp?num=010987>.

alternativa es encontrar más crudo”.¹⁰ Y para ello, nada mejor que acabar de definir el contencioso con Venezuela y obtener una franja de plataforma soberana en el golfo homónimo, cuya riqueza petrolera no es puesta en duda. Venezuela ha logrado con éxito posponer al menos este eje de conflicto. Para ello el gobierno de Caracas propuso y consiguió en la III Cumbre Presidencial colombo-venezolana la firma de un acuerdo que facilita la construcción de un gasoducto de 177 km entre ambos países, específicamente desde la Guajira colombiana hasta Maracaibo, en condiciones ventajosas para Bogotá y a un costo que inicialmente se ha calculado entre los 135 y 170 millones de dólares estadounidenses. Algunas fuentes colombianas sostienen que dicho acuerdo es más importante para Venezuela. Para esclarecer este punto, me remito a un fragmento de un discurso del mandatario colombiano Álvaro Uribe:

En cuanto al gas, confío que en los próximos días quede suscrito con el señor Presidente Chávez, con el gobierno saliente y entrante de Panamá, el acuerdo para un gasoducto de gran importancia de La Guajira (Colombia) a la ciudad venezolana de Maracaibo, para que una vez Venezuela integre su Este con su Occidente, pueda proveer a Colombia también de recursos de gas —que Colombia inicialmente proveería a Maracaibo— y que Venezuela pueda integrarse a Centroamérica a través de un gasoducto construido por el territorio de Colombia.¹¹

Queda claro del discurso de Uribe que el beneficiario fundamental de esta interconexión sería principalmente Colombia, pues Venezuela tiene inmensas reservas de gas. Ello se ha reflejado con la creación de una nueva división en PDVSA, denominada “Costa Afuera”, cuyo cometido sería la exploración y explotación de los hidrocarburos en un área de 500 000 km² que se corresponde con la bahía de Paria, el Golfo de Venezuela, la Plataforma Deltana y el Proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, esperándose de estos últimos “que entren a producir 700 millones de pies cúbicos de gas adicional a partir de 2007 ó 2008.”¹² Pero, indudablemente los Estados Unidos lograrían de paso la integración de importantes mercados energéticos en una red que beneficiaría al mercado norteamericano, pues este proyecto bilateral tiene un objetivo más ambicioso: conectar ambos países con Centroamérica y México, y de ahí sería casi inevitable que no llegara a California.

Una segunda cuestión de interés sería la previsible reubicación de las exportaciones petroleras venezolanas. Hasta el presente, el gobierno venezolano de Hugo Chávez ha mantenido su disposición de continuar el suministro de hidrocarburos a los Estados Unidos. Pero esta disposición está subordinada al clima de las relaciones entre ambos países, pues “las obligaciones de contrato se romperían en caso de conflicto”.¹³ Si a principios de 2002, los Estados Unidos importaban 11 millones de los 20 millones de barriles que necesitaban para cubrir diariamente sus necesidades energéticas, y de ellos 2 millones provenían de Venezuela, hoy han reducido esa cantidad a 1,5 millones de barriles

¹⁰ Carlos Guillermo Álvarez, *Economía y política petrolera*, Bogotá, Agenda Ciudadana, 2000, p.163.

¹¹ Álvaro Uribe Vélez, Discurso del Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en la Ceremonia de inauguración del XV Consejo Presidencial Andino, Quito, 12 de julio de 2004, en http://www.comunidadandina.org/cumbre_quito/discursos_uribe.htm.

¹² Wilmer Ferrer, “PDVSA creó división para explotar gas”, *Panorama Digital*, Caracas, 17 de julio de 2004.

¹³ Angela Nocioni, “El pueblo está conmigo”, Giandomenico Puliti (trad.), Entrevista realizada a Hugo Chávez, *Diario Liberazione*, Italia, abril de 2004.

diarios (alrededor de un 14 % con respecto al total de las importaciones de 2002), aumentando sus importaciones de otros mercados latinoamericanos como Colombia, México y Ecuador, o desde Canadá.

Para el gobierno estadounidense no resulta agradable subordinar su política exterior a la dependencia energética de otros mercados. Si en años recientes ha disminuido su dependencia energética de los mercados del Medio Oriente, puede probar a hacer lo mismo con Venezuela, al menos en el corto plazo, lo que sería un reforzamiento de la tendencia norteamericana a sustituir sus exportaciones petroleras de la OPEP por otras de países no miembros de la OPEP, manifestada ya a partir del 2001.¹⁴ Eso reduciría el peso de las exportaciones de hidrocarburos venezolanos en las relaciones entre Washington y Caracas, restándole fuerza a la capacidad de negociación de la última.

Desde otro ángulo hay una excesiva dependencia de las exportaciones petroleras venezolanas hacia territorio norteamericano con respecto al total de sus exportaciones de hidrocarburos. “La relevancia de los Estados Unidos como socio comercial de Venezuela es muy alta y se incrementa en el caso del petróleo, pues 57 % de las exportaciones de hidrocarburos del país se concentran en los Estados Unidos, según cifras del [Ministerio de Energía y Minas de Venezuela] (MEM) correspondiente a 2003”.¹⁵ A Venezuela tal dependencia le podría generar una situación parecida a la de Cuba en los años 60 del siglo XX con la cuota azucarera y el intento norteamericano de domesticar el proceso político cubano usando la restricción de dicha cuota como arma política.

El mercado norteamericano representa un seguro comprador para los hidrocarburos venezolanos y en opinión de Ciro Izarra, ex gerente de comercio internacional de PDVSA, “Estados Unidos es el mercado mejor adaptado para el procesamiento de los crudos pesados y extrapesados venezolanos”.¹⁶ Lo anterior implicaría que sería difícil en el corto plazo para Venezuela, colocar ese tipo de hidrocarburos en otros mercados y supondría un drenaje financiero extra para los adquirentes, con la finalidad de adaptar la tecnología de sus refinadoras para procesar el petróleo venezolano. Pero la dependencia puede ser compensada con la distribución de ese mercado en potenciales espacios geográficos no tan desconocidos para Venezuela. En el pasado reciente, la República Popular China, India y Malasia han mostrado su interés en adquirir hidrocarburos de este país. Específicamente, las exportaciones venezolanas serían de “orimulsión”, un combustible obtenido del tratamiento químico de los petróleos pesados de la Faja del Orinoco, especialmente creado para la generación de electricidad y que posibilita a sus adquirentes prescindir de grandes inversiones tecnológicas para su consumo, siendo más ecológico que el carbón. Ante la posibilidad de que los Estados Unidos intentaran restringir el acceso a su mercado del petróleo venezolano, Caracas podría suministrar petróleo a estos países. Más recientemente, la República Popular China (RPC) ha aumentado “en un 35 % las importaciones de petróleo”¹⁷ y se prevé por la Agencia Internacional de la Energía que esa

¹⁴ Una análisis ponderado y más amplio sobre la temática puede ser encontrado en Carlos Tablada y Gladys Hernández, *Petróleo, poder y civilización*, Editorial de Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 2003, pp. 41 a 47.

¹⁵ Marianna Parraga, “Cifras oficiales indican que 1,4 millones de barriles/diario están comprometidos con ese país. PDVSA está amarrada a EEUU”, *El Universal*, Caracas, 3 de mayo de 2004.

¹⁶ *Ibíd.*

¹⁷ “Chávez firma ocho acuerdos con el gobierno chino”, *DPA*, Beijing-Caracas, 23 de diciembre de 2004.

demanda se incremente un 13,6 % en el 2005 hasta llegar a los 6,24 millones de barriles diarios,¹⁸ aspecto que fue considerado especialmente en las negociaciones entre Chávez y Hu Jintao con motivo de la visita oficial del mandatario sudamericano al país asiático en diciembre pasado. Chávez ha reconocido esta posibilidad al afirmar que: “las empresas chinas de petróleo me han solicitado el incremento de su cuota de negocios con Venezuela. No podemos porque formamos parte de la cuota en la OPEP.”¹⁹ Al rebasar el precio del barril de petróleo los 40.00 dólares estadounidenses y estar sometida la OPEP a presiones para que contribuya a disminuir el precio del crudo, es lógico que la oferta aumentará modificándose las cuotas asignadas por esta organización. Algo que refuerza esta percepción es el rápido crecimiento que se espera tenga el intercambio comercial entre la RPCh y Venezuela en el 2005. Si en el 2004 las estimaciones situaban ese intercambio en unos 1 200 millones de dólares estadounidenses, el estimado para el año en curso sería de unos 2 700 millones,²⁰ teniendo un peso determinante las exportaciones de hidrocarburos desde Venezuela. Sin embargo, el gobierno venezolano ha sabido diversificar su mercado sin presentar esta realidad como una solución o paliativo ante una eventual erosión de su relación con los Estados Unidos, sino como una consecuencia ante la emergencia de nuevos mercados. El canciller venezolano Alí Rodríguez ha sido enfático al brindar seguridades a los intereses energéticos de los Estados Unidos en Venezuela, alegando que “no se trata de reducir las exportaciones a los Estados Unidos, sino de aumentar la producción para poder atender los incrementos de demanda que se registran en el mundo.”²¹

Hay una tercera causa en el aumento del peligro de conflicto entre Colombia y Venezuela, y está relacionada con la posición adoptada por el gobierno de Hugo Chávez en relación con el conflicto colombiano. Al suprimir el procedimiento de ‘persecución en caliente’, Chávez asumió una posición pragmática para no involucrar a Venezuela en el conflicto armado interno que desangra a Colombia, tomando distancia de las partes. Esta postura ha sido muy incómoda para el gobierno de Álvaro Uribe, quien en varias oportunidades ha demandado el restablecimiento de la cooperación militar contrainsurgente y que Caracas califique de terroristas a los grupos guerrilleros de las FARC-EP y la UC-ELN. Salvo entendimientos muy coyunturales con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por parte de la Dirección de Seguridad, Información y Prevención (DISIP) venezolana, relacionados con la solución de algún secuestro, o la colaboración antiguerrillera a título personal de alguna autoridad militar venezolana en la región fronteriza, hay “un deterioro sustantivo de los nexos militares”²² entre ambos estados, matizado por las acusaciones reiteradas de Bogotá de que Caracas respalda a los movimientos insurgentes colombianos o al menos muestra una actitud tolerante hacia ellos.

¹⁸ G. Velasco, “Chávez, el ‘señor de la energía’”, *América Económica*, 16 de julio de 2004, en <http://www.americaeconomica.com/numeros4/274/reportajes/2gema274.htm>.

¹⁹ Angela Nocioni, Ob. cit.

²⁰ “Pronostica el presidente Chávez que intercambio con China llegará a 2 700 MDD en el 2005”, *AFP*, Caracas, 27 de diciembre de 2004.

²¹ “Declaraciones de Canciller de Venezuela sobre las exportaciones de petróleo”, *EFE*, Caracas, 29 de diciembre.

²² Francine Jácome, “Crisis de gobernabilidad en Venezuela y sus efectos sobre sus relaciones con Colombia”, *Pensamiento Propio*, Buenos Aires, año 8, no.17, enero-junio de 2003, p.93.

En el futuro previsible no se espera que esa situación se modifique sustancialmente, salvo que los intereses de seguridad nacional de Caracas identifiquen como una prioridad la colaboración antisubversiva entre ambos países. En caso de una relación tirante entre Colombia y Venezuela, sería lógico que el gobierno de Chávez observara con simpatía a una insurgencia que puede limitar las incursiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a territorio venezolano, que posee un discurso que reivindica en cierta medida a Bolívar y que se opone a una elite política colombiana que Chávez califica de ultrarreaccionaria: “Es la oligarquía que mandó matar a Jorge Eliécer Gaitán (1948), es la misma que no quiere paz, que se ha opuesto sistemáticamente a la pacificación de Colombia. Es la misma que mató a Simón Bolívar, antibolivariana, antivenezolana, antilatinoamericana, entregada a los intereses de Washington.”²³

Sin embargo, estas hipotéticas simpatías podrían verse diluidas bajo las presiones externas. Para muestra un botón: el caso Granda. Posterior al secuestro de Rodrigo Granda, uno de los más conocidos comandantes de las FARC-EP, y a pesar de que el diario colombiano *El Tiempo*, había publicado en su edición del 17 de diciembre de 2004 que “en círculos del alto gobierno, y en voz baja, se confirmó que la detención ocurrió en Caracas”,²⁴ el gobierno venezolano optó inicialmente por hacer un prudente silencio. La acumulación de elementos que conducían a establecer la participación de oficiales de ambos países en la captura y posterior traslado de Granda a la frontera común, unido al reclamo de sectores de izquierda dentro de la intelectualidad mundial,²⁵ posibilitaron que Caracas asumiera una investigación y pidiera explicaciones a Bogotá, a la vez que condicionaba la marcha de múltiples acuerdos bilaterales a una disculpa oficial de Colombia por la violación de la soberanía venezolana, algo que enturbió las relaciones entre ambos países. Pese a ser una cuestión superada y en mi criterio no deseada por ninguna de las partes, la crisis bilateral en torno al caso Granda dejó percibir en sus momentos iniciales y en el tratamiento posterior, la intención venezolana de disminuir al mínimo posible los roces con Colombia por la real o supuesta presencia de miembros de los movimientos insurgentes en el territorio bajo jurisdicción de Caracas. A ello se suma una mayor colaboración entre las instituciones castrenses de ambos países, visible en la reunión que sostuvieron los ministros de Defensa, General Jorge Luis García Carneiro (Venezuela) y Jorge Alberto Uribe (Colombia) el 15 de diciembre, dos días después del secuestro de Granda. En dicha reunión se acordó profundizar la cooperación en cuestiones de seguridad fronteriza,

²³ Stella Calloni, “Aunque EEUU lo niegue, el Plan Colombia es militar, de guerra”. Entrevista realizada a Hugo Chávez, *La Jornada*, México, 18 de abril de 2004.

²⁴ Citado en *Cronología de un secuestro en Caracas bolivariana*, Colectivo de Organizaciones Populares de Catia, Caracas, 4 de enero del 2005, en <http://www.redresistencia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=115>.

²⁵ Inicialmente el intelectual germano Heinz Dieterich, instó a las autoridades venezolanas a salir de su mutismo ante el plagio de Granda en su artículo del 27 de diciembre de 2004 (Ver “Preocupante silencio de las autoridades venezolanas ante el secuestro de Rodrigo Granda”, *ALTERCOM*, en <http://www.altercom.org/article3353.html>). Poco después un grupo de 14 intelectuales, entre los que se encuentran los norteamericanos James Petras, Noam Chomsky y William Blum, el belga François Houtart, la venezolana Margarita López Maya y el colombiano Hernando Calvo Ospina, le solicitaron en una epístola pública al presidente Hugo Chávez, “que establezca una investigación especial independiente para esclarecer responsabilidades por el secuestro de Granda, y, ojalá, por el de otros dirigentes sociales colombianos en territorio venezolano”, calificando el operativo contra Granda como una nueva fase del Plan Cóndor. Ver “Carta abierta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías”, *Revista Koeyú Latinoamericano*, edición digital del 4 de enero de 2005.

inteligencia y planes de acción conjunta. En la rueda de prensa, el ministro colombiano fue más específico al precisar que se trabajará “con más intensidad en los temas de inteligencia para continuar teniendo éxitos compartidos en la lucha contra el ‘narcoterrorismo’ y muy a fondo con el tema de las drogas que tanto nos afecta.”²⁶ Llama poderosamente la atención que en esa ocasión su homólogo venezolano reconoció la captura el 9 de diciembre de cuatro militares colombianos que trabajaban desde noviembre de manera encubierta en el estado de Aragua junto a un teniente de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, cuya labor era desconocida por las instituciones venezolanas. De ser esto cierto, este incidente debió dar origen a un nuevo roce entre ambos países, pero dichos oficiales fueron liberados y el expediente abierto contra ellos bajo la acusación de espionaje fue archivado el 22 de diciembre.

En cuarto orden, se encuentra la colaboración entre la derecha colombiana en el gobierno y la derecha golpista venezolana, con la finalidad de subvertir el orden en Venezuela.

El periodista uruguayo Aram Rubén Aharonián, sostiene en su crónica “Venezuela: Un golpe con olor a hamburguesa, jamón y petróleo” del 28 de abril de 2002, la complicidad del Secretario General saliente de la OEA, César Gaviria, con el golpe contra el gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002. Gaviria sugirió al Consejo Permanente de esa organización, preterir al embajador que representaba a Caracas por haber sido depuesto el gobierno al que representaba. Lo lógico era que Gaviria hubiera mostrado al embajador Valero la solidaridad de la OEA y hubiera invocado la Carta Democrática contra los golpistas, en vez de aceptar que Pedro Carmona Estanga, sin legitimidad alguna, destituyera a dicho diplomático. Mientras tanto, “Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Colombia hacían esfuerzos para que se reconociera el gobierno de facto”,²⁷ caribeños insistían en el estreno de la Carta Democrática. La posterior aplicación por parte de la OEA de su Carta Democrática a favor del gobierno de Chávez, no fue decisiva para la restitución de la institucionalidad democrática en Venezuela, algo que tuvieron que lograr los militares leales a la Constitución junto al pueblo.

Las acciones del paro petrolero golpista en diciembre de 2002, tuvieron ramificaciones en Colombia. Entre los días 4 y 5 de ese mes, “el Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, se habría reunido con Pedro Carmona y otros golpistas venezolanos en el Hotel del Fondo de la Policía Nacional”²⁸ en Bogotá. A esta reunión se cree asistieron los generales colombianos Mora Rangel, Velasco (comandante de la Fuerza Aérea colombiana), el director de la Nueva Central Nacional de Inteligencia militar, Rosso José Serrano, acompañados por ejecutivos de medios de prensa colombianos; por los Estados Unidos Colin Powell y la Embajadora en Bogotá Patersson; y por Venezuela, Pedro Carmona, delegados de la plaza Altamira, directores y enviados de medios venezolanos. De esta reunión debe haber salido la idea de fomentar la imagen de que el gobierno venezolano apoya a la insurgencia colombiana, punto en el que convergen las posiciones de la derecha venezolana y el gobierno colombiano. Y quizás haya tenido continuidad en el foro de

²⁶ Citado en *Cronología de un secuestro en Caracas bolivariana*, Colectivo de Organizaciones Populares de Catia, Caracas, 4 de enero de 2005, en

<http://www.redresistencia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=115>.

²⁷ Antonio Guillermo García Danglades, *El petróleo de Venezuela, la Doctrina Bush y el tercer golpe de estado*, Argenpress, 22 de marzo de 2003, en <http://www.argenpress.info/nota.asp?num=002370>.

²⁸ *Ibíd.*

debate “Las amenazas a la democracia en América Latina: terrorismo, neopopulismo y debilidad del Estado de Derecho”, celebrado en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre del pasado año, con el auspicio de varias ONG entre las que resaltó la Heritage Foundation, contando con la presencia de Fernando Londoño Hoyos, Noemí Sanín, Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Teodoro Petkoff, entre otros. Obsérvese que según el criterio de la oposición venezolana, el mejor ejemplo de un gobierno neopopulista, irrespetuoso del Estado de Derecho y que es permisivo con el terrorismo (al no calificar de tal a la insurgencia colombiana), es el gobierno de Chávez. Similar posición sostuvo el general norteamericano James T. Hill, jefe del Comando Sur al declarar ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes que para los Estados Unidos había surgido una nueva amenaza: el populismo radical.

Como colofón de esta alianza entre las oligarquías nacionales está la solicitud de un sector ultraconservador del Senado colombiano para que la OEA aplique a Venezuela (léase al gobierno de Chávez, lo que implicaría un respaldo a su oposición) la Carta Interamericana de esa organización. A ello se suma el proceso de infiltración y posterior captura de un grupo de paramilitares colombianos para realizar acciones desestabilizadoras contra el gobierno venezolano. Sobre la cuestión anterior, el presidente Hugo Chávez acotó:

El terrorista aquel que aquí se juramentó como presidente está implicado en este plan, Pedro Carmona, desde Bogotá y sectores de la vida de Colombia están implicados en este plan (...) sectores que en Bogotá tienen protegidos a Pedro Carmona y en contacto entre otras cosas con el paramilitarismo colombiano, con los altos mandos del paramilitarismo colombiano, con sectores políticos de la rancia oligarquía bogotana.²⁹

El último punto y que tributa sustancialmente a esta presentación es la ruptura del balance militar entre ambos países. Hay que señalar que Caracas tradicionalmente compensaba su menor cantidad de efectivos militares en relación con los del país vecino, con un mayor grado de tecnología en sus armamentos. Hoy en día, Bogotá presenta ventajas en ambos indicadores.

Colombia ha incrementado su poderío militar, dotando a su fuerza aérea de varias decenas de modernos helicópteros (45 Bell UH-1A Huey, de los cuales varios actualizados a UH-1P Huey II estándar, 35 Sikorsky UH-60 A/L Black Hawk y 10 Mil Mi-17 rusos), inicialmente asignados para el combate contra el narcotráfico y luego usados contra la guerrilla, los cuales tendrían un efecto devastador para las fuerzas blindadas de Venezuela. A los Mirage V y Kfir de los que disponía la Fuerza Aérea Colombiana, se unieron los Mirage F-1, prácticamente donados por el gobierno de José María Aznar. Todos estos aviones podrían ser repotenciados, mejorando sus cualidades técnicas por los expertos israelíes de la Industria Aeronáutica Israelí (IAI) que brindan mantenimiento a los Kfir y asesoría técnica al Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN) colombiano. Desde 1988, los Mirage V han venido siendo equipados en la base aérea Madrid, cerca de Bogotá, adaptándoles para ser reabastecidos en vuelo, contando con nuevos sistemas de navegación-ataque, motores GE J-79, aviónica del Kfir C-7 e incluso misiles aire-aire

²⁹ Hugo Chávez, “La verdad sobre el caso de los paramilitares”, discurso en la instalación del Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), *Revista Koeyu Latinoamericano*, Caracas, 12 de mayo de 2004.

Rafael Python 3.³⁰ Súmesele a ello la decisión de Bogotá de adquirir 24 aviones Súper Tucano por 234,5 millones de dólares estadounidenses,³¹ así como otros 306 millones para adquirir “aeronaves dotadas de tecnología de punta y armamento eficaz, que permitirán un apoyo a fuerzas de superficie”,³² posiblemente cazas franceses del tipo Mirage 2000 Mk2.

Del lado venezolano, los F-16 norteamericanos están siendo repotenciados por tecnólogos de ese país sudamericano, lo que supone la falta de asistencia estadounidense para realizar dicha modernización. La utilidad real de estos aparatos, ha sido puesta en duda pero a su vez fue desmentida en la práctica al ser estos aviones un elemento central en un plan de magnicidio abortado por los servicios de seguridad venezolanos en abril de 2004.³³ Ante el rearme colombiano, como respuesta a sus necesidades reales de modernización y en la búsqueda de un nuevo balance militar con su vecino, Caracas ha conveniado con Rusia la adquisición de 44 helicópteros de los tipos Mi-17 y Mi-35, 50 cazas Mig-29 y cien mil fusiles AK-103 y AK-104, todo por un valor estimado de 800 millones de dólares estadounidenses. Asimismo, Venezuela adquirirá del Brasil una flotilla de aviones Súper Tucano para misiones aire-tierra, por un valor de 110-180 millones de dólares estadounidenses. Otros pertrechos serían adquiridos en España (cuatro corbetas misilísticas, por aproximadamente \$800-1 100 millones) y la RPCh (un satélite de comunicaciones por \$400 millones), hasta totalizar unos \$2 100-2 500 millones de dólares estadounidenses.³⁴

Las fuerzas terrestres colombianas poseen una indudable experiencia militar tras más de cuarenta años de conflicto armado interno, algo de lo que carece el ejército venezolano, acostumbrado a la tranquilidad de la vida del cuartel e inmerso desde la llegada de Chávez al gobierno en una serie de planes de desarrollo (construcción de viviendas, distribución de alimentos, prestación de servicios sanitarios a la población), que pudieran limitar su capacidad combativa. En los últimos dos años, las fuerzas armadas colombianas han estado sometidas a un proceso de reorganización y modernización. Parte de ello fue el intento de compra de más de 40 tanques AMX-30 de fabricación francesa a España, iniciado durante el gobierno de José María Aznar y luego cancelado por el actual gobierno socialista de Zapatero. Se pudiera pensar que son tanques anticuados, pero dadas las necesidades de los ejércitos latinoamericanos, conservan su utilidad y quizás dicha oferta pudiera ser sustituida por otra de excedentes norteamericanos de alguna de las versiones del M-60 A1/A3. No obstante el pretendido uso contrainsurgente de esos blindados es una mala excusa para su adquisición. Coincidió con Emilio Meneses, profesor de la Universidad Católica de Chile, cuando afirmaba que “Colombia combate a la guerrilla en selva y montaña, donde los tanques no operan. Colombia se arma pensando en Venezuela.”³⁵ Sumado a ello, legisladores colombianos que integran la comisión internacional del

³⁰ John Fricker, *Las fuerza aéreas latinoamericanas se modernizan*, en <http://www.aeroespacio.com.ar/site/antiores/520-528/526/latinfaa.htm>.

³¹ Ricardo Calderón, y Adriana Echeverri, “Guerra de aviones”, *Semana*, edición 1179, 6 al 13 de diciembre de 2004, Bogotá, pp.46 a 48.

³² Humberto Márquez, “Colombia-Venezuela: armas sin discordia”, *IPS*, 16 de marzo de 2005.

³³ Antonio José Medina, Nancy Faría y Maira Perozo, “DISIP: Planeaban atacar un Aló Presidente desde un F-16”, *Panorama Digital*, Caracas, 31 de julio de 2004.

³⁴ Humberto Márquez, “Venezuela: Chávez renueva armamento y se siente amenazado”, *Terra Viva*, vol.6, no.8, *IPS*, Roma, 25 de febrero de 2005.

³⁵ “Países de Sudamérica compran armas”, *Argenpress*, Buenos Aires, 5 de abril de 2004.

Congreso sugirieron el envío de esos tanques “a la frontera con Venezuela ante la gravedad de lo que sucede en ese país y para evitar que el presidente Hugo Chávez ‘trate de exportar’ sus problemas internos”³⁶. Este deseo coincide con las denuncias realizadas por la insurgente UC-ELN en el editorial de la *Revista Insurrección* del 2 de marzo del 2004, cuando alertaba: “Tanques que, según se ha filtrado, están destinados a La Guajira para reforzar los batallones mecanizados de Maicao y Buenavista, a Cúcuta para reforzar el batallón mecanizado General Maza, a Arauca para reforzar el batallón mecanizado Reveiz Pizarro y otros para los llanos orientales, todos sitios estratégicos en los 2 219 kilómetros de la frontera con Venezuela.”³⁷

El destino de estos tanques, junto a la construcción de bases militares en el departamento de Arauca (Tame para el ejército colombiano y Saravena para uso de los militares norteamericanos) y el reforzamiento de las brigadas II, V, XVI y XVIII con un contingente de entre 17 mil y 30 mil soldados destinados a la región del Catatumbo, hacen pensar en la preparación de un teatro de operaciones militares de cara a un conflicto convencional con Venezuela.

Ante las causales descritas anteriormente, creo necesario configurar mi hipótesis. Si lo que Gloria Gaitán³⁸ denuncia es cierto, Colombia utilizaría ese contingente militar de tropas de élite, para lanzar una ofensiva que provoque un repliegue del movimiento insurgente hacia la zona sur de la frontera binacional con Venezuela. Las fuerzas guerrilleras colombianas pudieran ceder al empuje de esta ofensiva, pero la verdadera situación de caos se generaría en caso de un desplazamiento masivo de refugiados (civiles colombianos no combatientes). Esta situación de emergencia humanitaria generaría un desplazamiento de importantes contingentes de las tropas venezolanas hacia dicha región para proteger su soberanía y brindar asistencia a los refugiados. Ese sería el momento ideal para pretextar que las fuerzas militares de Venezuela se han movilizad para ayudar a la insurgencia colombiana (quedando Venezuela como un Estado que “patrocina el terrorismo”, recuérdese que las organizaciones guerrilleras colombianas han sido contempladas como grupos terroristas en la lista del Departamento de Estado norteamericano) o para aducir que Venezuela se dispone a agredir a Colombia³⁹ e iniciar “las hostilidades por el costado de la frontera norte de Colombia”.⁴⁰ Es decir, la dirección estratégica de la ofensiva colombiana sería buscando los territorios del Zulia y la salida al Golfo de Venezuela: la región rica en petróleo y gas. En cualquiera de los dos supuestos, la presencia militar norteamericana del lado de Colombia sería una consecuencia inmediata, algo planteado por el sociólogo norteamericano de la Universidad de Nueva York, James Petras: “En mi opinión, se

³⁶ “Congresistas creen que tanques deben ir a frontera con Venezuela”, *DPA*, Bogotá, 3 de marzo de 2004.

³⁷ UC-ELN, “Los tanques de España y la guerra contra Venezuela”, *Revista Insurrección*, no.4, 2 de marzo de 2004.

³⁸ Hija del líder liberal colombiano Jorge Eliécer Gaitán, asesinado hace más de medio siglo. **dónde lo dice**

³⁹ Como bien explica Luis Britto García en su artículo “Colombia: crónica para una guerra anunciada”, los medios de comunicación están contribuyendo a conformar una imagen de un estado venezolano invasor de Colombia. Esto no es un fenómeno nuevo. A principios de la década de 1990 del siglo pasado, la desafortunada propuesta de realizar una “persecución en caliente” Colombia adentro, por parte de dos parlamentarios venezolanos fue casi transformada por la prensa como una declaratoria de guerra. A inicios de este año Luis Miguel Morelli Navía, gobernador del Norte de Santander (Departamento fronterizo con Venezuela) denunció una supuesta incursión de militares de Venezuela en Tibú que al final resultó falsa.

⁴⁰ “Gloria Gaitán: el Plan Patriota de Colombia persigue enfrentar al ejército venezolano”, *VENPRES*, 4 de mayo de 2004, en <http://7www.argenpress.info/nota.asp?num=010885>.

prepara un levantamiento interno y una invasión fronteriza de Colombia que abra camino a la entrada de USA.”⁴¹

Una alianza probable del movimiento insurgente con las tropas venezolanas, estaría descartada en esta hipótesis. Si bien las guerrillas colombianas han tenido expresiones de simpatía por el gobierno de Hugo Chávez, el costo político que tendría esa alianza coyuntural ante una población colombiana que históricamente ha visto en Venezuela un adversario, redundaría en la pérdida de legitimidad de estas fuerzas irregulares por no haber priorizado los intereses nacionales.

Los acontecimientos relativos a las relaciones entre ambas naciones en el período comprendido entre los meses de julio de 2004 hasta febrero del presente año, sin deslegitimar las hipótesis anteriores, exigen un análisis más ajustado de las mismas. Se puede apreciar un esfuerzo denodado del gobierno venezolano por dismantelar los potenciales ejes de conflicto con Colombia, pero esto no constituye una garantía suficiente para la paz entre ambos países.

El reavivamiento de las tensiones en la región colindante entre Bolivia, Chile y Perú. Causas históricas y actuales de conflictividad e hipótesis al respecto

A lo largo del siglo XIX, Chile mantuvo una rivalidad contra Bolivia y Perú, para reafirmarse en especial ante la segunda como la potencia marítima sudamericana en el Pacífico. Esa rivalidad condujo a dos guerras: la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana en la década de los años 30 y luego la segunda Guerra del Pacífico, de 1879 a 1884, donde tanto a Perú como a Bolivia le fueron usurpados extensos territorios, con la agravante de que Bolivia perdió su acceso al mar convirtiéndose en un país mediterráneo. A esa época se remonta el reclamo boliviano por una salida soberana al mar y el deseo peruano de recuperar los territorios de Arica y Tarapacá.

Hoy día hay otras razones de peso para que esas tensiones renazcan de manera exacerbada:

1. La carencia que padece Chile de recursos energéticos e hídricos, los cuales posee Bolivia, estando estos al alcance de Brasil y Argentina.
2. La aparición de actores políticos en Bolivia y Perú que han enarbolado la salida al mar y la devolución de los territorios usurpados por Chile como uno de los elementos fundamentales de su discurso político.
3. La carrera de armamentos que se está produciendo en la región, entre Perú y Chile, con mayor énfasis en el segundo.

A partir del descubrimiento del yacimiento de gas en Tarija (Bolivia), varias empresas se asociaron para su extracción y posterior comercialización. Con ese fin se creó el consorcio Pacific LNG (constituido por las trasnacionales British Gas (BG), British Petroleum (BP) y Repsol-YPF), cuyo promedio anual de ingreso se preveía iba a ser de 1 369,6 millones de dólares, mientras que el estado boliviano obtendría por el pago de impuestos y regalías

⁴¹ Citado en José Del Grosso, “El país por un dinerito”, *Rebelión*, 7 de abril de 2004, p.88.

entre 40 a 70 millones de dólares estadounidenses. Siendo el contrato de exportación por veinte años, las transnacionales petroleras obtendrían la pingüe ganancia de más de 27 mil millones de dólares. El mercado principal sería el territorio norteamericano a donde se exportarían diariamente 36 millones de m³ de gas para que la empresa Semptra Energy (subsidiaria de Enron) se encargara de su distribución. Para la exportación se construiría un gasoducto desde Bolivia hacia el territorio chileno, cuya coordinación fue considerado un asunto de seguridad nacional y sometido a negociación secreta entre los altos mandos militares de Bolivia y Chile.

Sin embargo, el proyecto de explotación de Tarija se vio paralizado por las protestas de la población boliviana que provocaron la salida del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada a fines de 2003. Las protestas reivindicaban la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, especialmente el gas, exigiendo un referéndum para determinar por dónde saldría el gas (Chile o Perú). Amparado en la legitimidad de la consulta popular, también se esperaba modificar la Ley de Hidrocarburos, para otorgarle una mayor participación al Estado en las ganancias provenientes de las exportaciones de gas. Esto se vincula con la escasez que padece Chile del combustible. Al haber condicionado cualquier exportación de gas al territorio chileno a una negociación de una salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico, La Paz ha puesto el dedo en la llaga de las debilidades chilenas. El actual mandatario boliviano Carlos Mesa, ha definido la cuestión de la siguiente manera: “Los bolivianos plantean la necesidad de la recuperación del Litoral marítimo, y es muy difícil explicar que por cuestiones económicas se debe entregar un recurso natural a un país que sistemáticamente nos dice no. La herida es tan profunda y hay que entenderla en esta dimensión”.⁴²

La situación de Chile se complica por la crisis energética que está afectando al Cono Sur, lo que ha obligado a Argentina a incumplir los compromisos de abasto de gas contraídos con Santiago de Chile. Esos recortes han afectado fundamentalmente el centro y sur de Chile, cuya energía es generada en un tercio con gas, del que “le estaban faltando cerca de cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas, o sea, el 25 % de lo que importa desde Argentina.”⁴³ Bolivia decidió venderle a Argentina cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas, con la condición expresa de no reexportarlo hacia territorio chileno, usando al hidrocarburo como mecanismo de presión para forzar a Chile a negociar. “La administración de Néstor Kirchner tuvo que aceptar el condicionamiento impuesto por los bolivianos para que el gas se destine exclusivamente al mercado interno”.⁴⁴

Sin embargo, la cuestión de los yacimientos de gas en Tarija, pasan por una lectura mucho más compleja. Brasil y Argentina tienen mucho interés en ser beneficiarios del gas boliviano. Actualmente Brasil demanda entre 18 y 19 millones de metros cúbicos diarios de gas de un total de 30 que tiene acordados con Bolivia. De hecho Petrobrás y Repsol-YPF participan en la construcción de gasoductos que unen a ambos países con las fuentes energéticas bolivianas. La ministra brasileña de Energía y Minas, Dilma Rousseff, en la

⁴² “Presidente: No enviar gas a Chile es decisión soberana”, *El Diario*, La Paz, 3 de mayo de 2004.

⁴³ Christian Viancos, “Crisis: Se complica suministro de gas de Argentina a Chile”, *El Mercurio*, Santiago de Chile, 27 de abril de 2004.

⁴⁴ Antonio Rossi, “La crisis energética: por seis meses, se importarán hasta 4 millones de metros cúbicos diarios”, *Clarín*, Buenos Aires, 22 de abril de 2004.

inauguración del cuarto Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad en Río de Janeiro, propuso el 26 de abril de 2004, una integración gasífera trinacional sin mencionar a Chile. “El director nacional de Economía de los Hidrocarburos de Argentina, Diego Guichón, señaló que Argentina y Bolivia invertirán unos 1 000 millones de dólares en la construcción de un gasoducto entre ambos países.”⁴⁵ El hecho de que Chile no haya sido mencionado es notorio, si tomamos en cuenta que es miembro asociado de MERCOSUR (tanto como Bolivia) y que necesita de energía tanto como Argentina y Brasil. Pero los dos gigantes sudamericanos parecieran estar castigando la preferencia comercial de Chile por el TLC con los Estados Unidos y el alineamiento de Santiago con Washington en el tema ALCA.

Chile trata de solventar su déficit de energía acudiendo a suministros de Ecuador y desde países asiáticos. Pero no ha cejado en el empeño de encontrar soluciones que le garanticen una mayor autonomía. Es por esa razón que la chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), ha contratado los servicios de la firma estadounidense Veritas para realizar exploraciones en busca de gas en Tierra del Fuego. Como complemento, se especula que Chile pudiera optar por la vía electronuclear,⁴⁶ cuestión que pudiera resultar un reto a la seguridad nacional de sus vecinos en caso de construirse reactores que funcionen con agua pesada.

A la par de sus problemas energéticos, Chile tiene otra preocupación: la aridez de más de siete millones de hectáreas de sus territorios norteños. El agua que tanto necesita para irrigarlos se encuentra en el territorio boliviano. Los salares (cuencas subterráneas de agua) de Uyuni y Copiasa, y los lagos Poo Po y Uru Uru, contienen grandes reservas de agua, y están en la dirección de una más importante: el lago Titicaca. Pero para poder alcanzarlos, Chile tendría que intercambiar territorios con Bolivia, o privarla de ellos mediante un conflicto bélico, lo que de paso podría facilitarle su inclusión dentro de la cuenca hidrográfica del Titicaca. Lo anterior no es una mera suposición. El presidente del Instituto de Ecología Política de Chile (IEP), Manuel Baquedano, sostiene que una guerra para obtener tal recurso podría tener lugar: “Dentro de los próximos años, el recurso más valioso va a ser el agua, el oro azul. Este elemento va a ser el que desatará numerosos motivos de guerra en el mundo. Y Chile, por la escasez del recurso, en el norte de su país, no es la excepción.”⁴⁷

En segundo lugar, en Chile puede causar preocupación el hecho de que estén emergiendo discursos nacionalistas que reivindiquen la recuperación de los territorios usurpados a Bolivia y Perú en la segunda Guerra del Pacífico. Es de público conocimiento que los hermanos Antauro y Ollanta Humala Tasso, líderes del Movimiento Etnocacerista, con fuerte ascendencia en la reserva del Ejército Peruano, han realizado declaraciones muy fuertes, en el sentido de que si llegaran a formar gobierno, lo primero que harían sería declararle la guerra a Chile.⁴⁸ El consultor internacional en asuntos de defensa, el chileno

⁴⁵ “Brasil propone una integración gasífera con Bolivia y Argentina”, *La Razón*, La Paz, 27 de abril de 2004.

⁴⁶ “Chile desarrolla proyecto para construir una central nuclear”, *La Razón*, Lima, 18 de octubre de 2004, pp. 10 y 11.

⁴⁷ “Chile ya tomó por la fuerza recursos de agua de Bolivia”, *La Razón*, Lima, 22 de enero de 2004, p.3.

⁴⁸ Perú sería el único país de la región que podría contender con Chile, al poseer 150 T-72 y 300 T-55 repotenciados a T-64 y T-72 por especialistas de la República Popular China; su flota de fragatas misileras Lupo de origen italiano y sus Mirage 2000, Mig-29 y SU-25. Todo este armamento fue comprado durante el

Daniel Prieto Vial considera probable una guerra contra uno o más potenciales adversarios, incluyendo entre estos a Argentina,⁴⁹ lo que justificaría la carrera armamentista desatada por Santiago de Chile. Este rearme le permitiría a Chile obtener un poder relativo que le facilite ante sus vecinos “*negociar una mejor posición*”⁵⁰ (entiéndase, convencerles de que le den participación en la explotación de sus recursos naturales).

Para llevar a cabo sus planes, Chile ha llevado adelante un ambicioso plan de adquisiciones de armas en el mercado mundial. La ejecución del Plan Alcázar, le permitió a Chile adquirir de uso al ejército holandés unos 202 tanques Leopard IV de fabricación alemana y posteriormente otros 170 tanques de igual tipo a la empresa alemana Krauss-Maffei Wegmann (fabricante del Leopard). Los adquiridos a Holanda fueron equipados con “visión nocturna y blindaje especial tipo “Applique” que aumenta la protección contra misiles y proyectiles del tipo HEAT”.⁵¹ Su Armada ha hecho otro tanto al llevar a cabo el Plan Fragata, por el cual ha adquirido una británica del Tipo 22 (anteriormente HMS Sheffield, rebautizada como FFG-19 Almirante Williams) por 50 millones de dólares estadounidenses. Paralelamente, Chile desechó la compra de cuatro fragatas a Holanda por un monto de 350 millones y adquirió de los Estados Unidos una flotilla de tres fragatas tipo Spruance al costo de 17 millones cada una, una verdadera ganga si tomamos en cuenta los precios del mercado mundial de armas. Estos buques tienen la “capacidad de transportar misiles teledirigidos Tomahawk que tienen un alcance de 1 800 kilómetros.”⁵² Como se recordará, estos misiles han sido la base de los bombardeos a larga distancia en las campañas que han librado los Estados Unidos contra Iraq y Afganistán. La Armada de Chile también ha contratado la construcción de dos nuevos submarinos valorados en 450 millones de dólares estadounidenses, que se suman a los ya existentes Thompson y al Simpson. Y la fuerza aérea, además de tener una dotación de unos 40 Mirage V y 50 franceses y una flotilla de F-5E norteamericanos, modernizados en ambos casos, se ha convertido en la segunda de América Latina en adquirir 10 cazas F-16 Block 50+ a un costo de \$660 millones de dólares estadounidenses. La diferencia sustancial entre los F-16 venezolanos y los chilenos, es que los segundos son totalmente nuevos y cuentan con todas

segundo mandato de Alberto Fujimori, excepto las Lupo y los Mirage 2000, adquiridos en gobiernos anteriores. En el caso de los aviones de procedencia rusa o bielorrusa se cree que pudieran haber sido adquiridos, a un costo de aproximadamente de \$400 millones de dólares estadounidenses, en malas condiciones técnicas. Prueba de ello es que de los 18 Mig-29 adquiridos a Bielorrusia, dos quedaron destruidos en accidentes ocurridos en 1997 y 2001, y otras siete unidades se encuentran inoperables. Por esta razón el Comité de la Federación Rusa para la Cooperación Técnico-Militar, ofreció al Perú la posibilidad de sustituir los Mig-29 adquiridos a Bielorrusia por otros, posiblemente del tipo Mig.29-SE. A fines de 2003, Perú y Francia suscribieron un acuerdo que le permitiría a Lima modernizar su flota de Mirage 2000. Posiblemente Perú adquiera dos fragatas Lupo de uso para compensar las compras chilenas.

⁴⁹ La visión de que Argentina también es un potencial adversario está presente en el pensamiento de las fuerzas armadas chilenas. A fines de 2003, tres militares chilenos (un Teniente Coronel, un Mayor y un suboficial) fueron descubiertos realizando espionaje en el consulado argentino en la ciudad chilena de Punta Arenas. Pese a las disculpas ofrecidas por la ministra Michele Bachelet que fueron aceptadas por Buenos Aires y el enjuiciamiento de los infractores, resulta extremadamente difícil aceptar que obraban por cuenta propia.

⁵⁰ “Poder bélico de Chile permite negociar mejor con países vecinos”, *La Razón*, Lima, 21 de enero de 2004, p.3.

⁵¹ “Ejército chileno: la fuerza blindada más poderosa de América”, *La Razón*, Lima, 26 de enero de 2004, p.13.

⁵² Wilson García Mérida, “Estados Unidos fomenta el armamentismo chileno (I)”, *Argenpress*, 27 de marzo de 2004, en <http://www.argenpress.info/nota.asp?num=009781>.

sus capacidades ofensivas, incluyendo los misiles Amraam para dismantelar las instalaciones de radar y de defensa antiaérea, lo que haría vulnerable las defensas terrestres de sus potenciales adversarios. Súmesele el hecho de que en septiembre del pasado año, la entonces ministra de defensa Michele Bachelet suscribió en Moscú un convenio de cooperación militar con su homólogo Serguei Ivanov, cuya vigencia será de cinco años y prorrogable automáticamente por dos más, fruto del cual Chile adquirirá 24 cazas Mig-29 de generación 4+ y un número indeterminado de sistemas antiaéreos de última generación Buk-M1-2 equipados con misiles 9m317, capaces de abatir objetivos que vuelen a alturas de 3 a 42 km con un 95 % de efectividad. Dicha misión evaluó junto a sus contrapartes rusas la posibilidad de adquirir en el futuro helicópteros Mi-17, Mi-35 y Ka-31, así como sistemas de armas antitanques y sistemas antiaéreos Iglá.⁵³ Una parte de dicho acuerdo es aquella que contempla “la capacitación de especialistas militares, el trabajo conjunto de investigación científica, de diseño y de pruebas en la esfera de armamentos y equipo militar así como el intercambio de especialistas.”⁵⁴

En presencia de tal rearme, la hipótesis que sostengo es de que:

Chile pudiera estar funcionando como guardián de los intereses norteamericanos en la zona, ante el surgimiento de gobiernos menos proclives a Washington como el de Buenos Aires o la posibilidad de que triunfen alternativas populares como la del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia o la del Movimiento Nacionalista Peruano de los hermanos Humala, ahora. Sin embargo, Chile también actúa de acuerdo con sus propios intereses, tratando de presionar a Bolivia para que le dé acceso a recursos que le son deficitarios como el agua y el gas. En caso de que ello degenerara en un conflicto armado, donde impondría su abrumadora superioridad tecnológica, el ejército chileno conoce que las probabilidades de intervención al lado de Bolivia en el conflicto, por parte del ejército peruano, serían altas y sólo la alta capacidad destructiva de la tecnología militar chilena podría ser el factor disuasivo que le evite la interferencia de terceros. El gran problema para los chilenos sería como legitimar un *casus belli* contra Bolivia ante la comunidad internacional, aunque no faltan incidentes en la frontera común que magnificados pudieran desencadenar una escalada bélica.⁵⁵

A modo de conclusión

La tendencia expresada en el rearme de algunos países sudamericanos puede repercutir en el reinicio de una carrera armamentista convencional en la región. Este rearme beneficia al complejo militar industrial de varios países, fundamentalmente de aquellos que debieran estar más comprometidos con garantizar la paz mundial: los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

⁵³ Red Erbol, “Chile comprará flota de 24 aviones caza a Rusia”, La Paz, 20 de septiembre de 2004, en <http://www.erbol.com.bo/20040920chilecompraaviones.htm>.

⁵⁴ “Chile busca fabricar equipos militares con apoyo de Rusia”, *La Razón*, Lima, 11 de septiembre de 2004, p.11.

⁵⁵ Diana Valdivia y Mauricio Silva, “Visviri: aduaneros bolivianos disparan a camionero en territorio chileno”, *El Mercurio*, Santiago de Chile, 24 de mayo de 2004.

El rearme está siendo parte de una dinámica que involucra la necesidad de controlar o ser beneficiario de recursos importantes como los energéticos fósiles o los hídricos, a la vez que se trata de poner punto final a antiguos conflictos territoriales. Pero parte de esta dinámica tiene un vínculo muy estrecho con la necesidad de contar con “países gendarmes” (Colombia y Chile) que controlen a aquellos estados donde las relaciones de poder en su interior se están reconfigurando y pudieran expresarse externamente en posibles alternativas contrahegemónicas que cuestionen la dominación norteamericana en América Latina.⁵⁶

El seguimiento de estas posibles áreas de conflicto debiera ser una prioridad para los cientistas sociales latinoamericanos. Prevenir estos conflictos y denunciar a quienes están potenciándolos a espaldas de los pueblos, más que una cuestión académica pasa por el compromiso de quienes soñamos con una América Latina integrada en torno a sus propios intereses, próspera y de ejemplar coexistencia pacífica.

⁵⁶ Resulta llamativo que en octubre del pasado año se desarrolló en Iquique, zona próxima a las fronteras de Chile con Bolivia y Perú, un ejercicio militar coordinado, con la participación de las fuerzas aéreas de Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos, nombrado “Salitre 2004”. La hipótesis asumía que dos países denominados RL y BL, tienen un diferendo agravado por tensiones entre ambos. La coalición de los países participantes en la maniobra (fuerzas azules) acudían en apoyo del país BL y contra las fuerzas opositoras (fuerzas rojas), en una campaña aérea de baja intensidad. Asumir esto equivale a decir que las fuerzas no son de interposición, no son neutrales en caso de conflicto, sino que toman parte a favor de uno de los potenciales contendientes en contra de “fuerzas rojas” en un conflicto de “baja intensidad”, como si uno de los estados fuera “agresor”, cuestión que no aparece definida en la hipótesis. Casi se sugiere que los “opositores” son fuerzas irregulares. Ver “Aviones de Argentina, Brasil, EEUU y Chile participan en ejercicios militares”, *La Razón*, Lima, 27 de septiembre de 2004, pp.10 y 11.